



**Consejo Económico y
Social**

Distr.
GENERAL

E/1995/48
21 de abril de 1995
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Período de sesiones sustantivo de 1995
Ginebra, 26 de junio a 28 de julio de 1995
Tema 5 h) del programa provisional*

**CUESTIONES SOCIALES, HUMANITARIAS Y DE DERECHOS HUMANOS: INFORMES
DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS, CONFERENCIAS Y CUESTIONES CONEXAS**

ESTUPEFACIENTES

Resumen del informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes correspondiente a 1994

1. En virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) debe redactar un informe anual sobre su labor y los informes complementarios que considere necesarios. Una obligación análoga dimana del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Los informes deben presentarse al Consejo Económico y Social por conducto de la Comisión de Estupefacientes. Todos los años, la JIFE, en su informe anual, ofrece un análisis completo de la situación corriente en materia de fiscalización de estupefacientes en el mundo y recomienda las medidas que considera adecuadas.

2. La reseña general del informe de la JIFE correspondiente a 1994 se centró en la evaluación de la eficacia de los tratados de fiscalización de estupefacientes. La JIFE decidió emprender dicha tarea, entre otras cosas en cumplimiento de la resolución 48/12 de la Asamblea General, en la que la Asamblea pidió a la Comisión de Estupefacientes que, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y en colaboración con la JIFE Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, supervisara y evaluara las actividades realizadas en los planos nacional e internacional para aplicar los instrumentos internacionales de fiscalización de drogas, con miras a determinar las esferas en que se hubiesen logrado progresos

* E/1995/100.

satisfactorios y los puntos débiles. En su labor de evaluación, la JIFE trabajó en estrecha colaboración con el Director Ejecutivo del PNUFID y la Comisión de Estupefacientes y decidió dedicar el capítulo de reseña general de su informe a una evaluación de la eficacia de los tratados de fiscalización de estupefacientes y examinar el tema más detalladamente en un documento especial complementario de dicho informe.

3. La JIFE tomó nota de que su labor debía consistir, precisamente, en evaluar la aplicación de los tratados sobre la base de los datos aportados por los gobiernos y los resultados de su propia supervisión de las medidas adoptadas a nivel gubernamental.

4. En su evaluación de la aplicación de los tratados, la JIFE no ha presentado todos los logros, pero ha destacado algunos progresos realizados gracias a los tratados, en particular en la prevención de la desviación de estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en la Lista II del Convenio de 1971. La JIFE estableció las esferas prioritarias en las que los gobiernos podrían actuar con mayor diligencia, entre ellas, la fiscalización de precursores y otros asuntos prescritos en la Convención de 1988. Otra esfera prioritaria se centró en las estrategias necesarias para garantizar el suministro de estupefacientes con fines médicos, lo cual, según ha recordado la JIFE, ha sido uno de los objetivos de los tratados. Asimismo, la JIFE determinó esferas que debían ser objeto de mayores investigaciones, por ejemplo, los vínculos entre los sistemas nacionales inadecuados de distribución de fármacos lícitos y el uso indebido de dichas sustancias.

5. En general, la JIFE consideró que no era necesario enmendar en forma considerable los tratados y, en particular, expresó dudas acerca de la viabilidad de nuevas disposiciones obligatorias más detalladas sobre reducción de la demanda de estupefacientes. No obstante, la JIFE observó con interés las propuestas sobre la posibilidad de concertar una nueva convención que proscribiera el blanqueo de las ganancias provenientes de actividades de la delincuencia organizada, incluido el tráfico de estupefacientes.

6. Al analizar las enmiendas que podrían señalarse a la atención de los gobiernos, la JIFE determinó, entre otras, el fortalecimiento de las medidas de fiscalización de la paja de adormidera, la clasificación de los productos derivados de la cannabis de acuerdo con su potencia y la solución de las persistentes contradicciones entre las disposiciones de los tratados de fiscalización de estupefacientes y de algunas legislaciones nacionales sobre hábitos tradicionales de consumo de la hoja de coca, sobre la base de estudios científicos adecuados.

7. La JIFE determinó también otras enmiendas que la Comisión de Estupefacientes y el Consejo Económico y Social podrían introducir en los tratados, por ejemplo, la aprobación de un sistema de previsiones simplificado con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, el fortalecimiento de las medidas de fiscalización de sustancias sicotrópicas que dimanen de los tratados en concordancia con las resoluciones del Consejo, la simplificación de los procedimientos de presentación de informes y la introducción de un sistema de previsiones simplificado para los estupefacientes sintéticos.

8. La JIFE señaló que los tratados de fiscalización de drogas constituían el fundamento legislativo del sistema de fiscalización internacional de esas sustancias. Su concepción y evolución habían estado directamente en función de la respuesta de los países y de la comunidad internacional a la variación de las situaciones de uso indebido y tráfico de drogas. Cada una de las disposiciones de los tres tratados internacionales sobre fiscalización de drogas había sido resultado de diversas experiencias de fiscalización de drogas en el plano nacional o internacional, del intercambio de opiniones y conocimientos técnicos, y de transacciones entre diversas situaciones y prioridades nacionales. Los tres tratados se apoyaban y complementaban mutuamente, y tenían una sola meta principal, una filosofía: prevenir el consumo de drogas con fines no médicos. Dicha meta respondía a consideraciones humanitarias, como proteger a las personas contra la esclavitud de la farmacodependencia y a la sociedad contra la conducta irresponsable de las personas intoxicadas.

9. La JIFE hizo hincapié en que la adhesión universal, la aplicación correcta de las disposiciones de los tratados en los planos nacional e internacional y la rápida adaptación del sistema de fiscalización de estupefacientes a las variaciones en el uso indebido y el tráfico de drogas eran indispensables para garantizar la eficacia de los principales tratados internacionales de fiscalización de drogas.

10. Al 1º de noviembre de 1994, el número total de Estados Partes en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 era de 149, de los cuales 21 eran solamente Partes en la Convención y 128 eran Partes en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972. Ciento treinta y dos Estados eran Partes en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. En cuanto a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, había sido ratificada por 103 Estados y la Unión Europea, lo que representaba aproximadamente el 54% de todos los países del mundo.

11. En el capítulo II de su informe, la JIFE expresó su esperanza de que los Estados interesados no sólo tomaran rápidamente las disposiciones para pasar a ser Partes en los tratados internacionales sobre estupefacientes, sino que también promulgaran la legislación y los reglamentos nacionales necesarios para el cabal cumplimiento de esos tratados. La JIFE también hizo observaciones sobre el cumplimiento, por los diversos países, de los requisitos para la presentación de informes establecidos en las dos Convenciones y el Convenio, y subrayó la importancia de la presentación de informaciones estadísticas y datos de otra índole para la eficacia de los sistemas nacionales e internacionales de fiscalización de estupefacientes.

12. En lo que respecta a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la JIFE examinó las tendencias imperantes en la demanda de opiáceos y el suministro de materias primas de opiáceos y llegó a la conclusión de que, de acuerdo con las estimaciones, en 1995 la producción de materias primas superaría al consumo de opiáceos en unas 28 toneladas. La JIFE proporcionó datos sobre los resultados de sus consultas con el Gobierno de la India sobre el nivel de sus existencias de opio.

13. En relación con las sustancias fiscalizadas con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, continuaban las desviaciones de las sustancias enumeradas en las Listas III y IV. La JIFE se congratuló de que la mayoría de

los gobiernos ya hubieran establecido mecanismos eficaces de fiscalización de las exportaciones de esas sustancias. Muchos gobiernos también habían consultado a la JIFE en casos de dudas sobre la legitimidad de los pedidos de importación y la JIFE ofrecía ejemplos de investigaciones llevadas a cabo conjuntamente, gracias a las cuales se habían impedido desviaciones de sustancias. Con todo, la JIFE también destacó casos ocurridos en países donde no existían disposiciones de fiscalización de las exportaciones o donde la reglamentación era laxa. La JIFE se mostró especialmente preocupada por la desviación y el uso indebido de las benzodiazepinas a consecuencia de la baja prioridad que algunos gobiernos habían asignado a la fiscalización del comercio de dichas sustancias.

14. En lo que respecta a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la desviación y el contrabando de precursores habían continuado y de todo el mundo se había recibido información al respecto. La JIFE, en colaboración con los gobiernos, había detectado casos de desviación e intentos de desviación de grandes cantidades de efedrina, sustancia que había sido incluida en el Cuadro I de la Convención de 1988 debido a su utilización frecuente en la fabricación ilícita de metanfetamina. La JIFE invitó nuevamente a todos los Estados que aún no fueran Partes a que ratificaran la Convención de 1988. Asimismo, reiteró su petición a todos los Estados, incluidos los Estados que no eran Partes en la Convención, que velaran por la aplicación universal de las disposiciones de dicha Convención. La JIFE invitó también a todos los Estados a que examinaran su actual sistema de fiscalización de precursores y a que consideraran la posibilidad de tomar otras medidas para evitar su desviación.

15. En el capítulo III del informe, la JIFE presentó algunas de las conclusiones obtenidas en sus misiones a Belarús, Bélgica, Brasil, Camboya, China, Dinamarca, España, la India, Italia, el Líbano, Luxemburgo, Nigeria, la República Democrática Popular Lao, Suiza, Turquía y Venezuela.

16. En África, la JIFE señaló el constante tráfico en tránsito de heroína y cocaína y el aumento del uso indebido de estupefacientes. Se estaban abriendo nuevas rutas para la cocaína en Angola, Namibia y Sudáfrica. Si bien el uso indebido de anfetaminas, estimulantes de tipo anfetamínico y sedantes estaba muy extendido, el uso indebido de heroína y cocaína crecía en ciertos segmentos de las poblaciones urbanas. África era un importante proveedor de cannabis para el resto del mundo, que recibía grandes cargamentos desde Marruecos y, en forma creciente, de los países del África al sur del Sáhara. Era necesario adoptar medidas y estrategias de fiscalización de estupefacientes de gran alcance con objeto de evitar una agravación del problema de las drogas en África y la JIFE hizo un llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional para que fortalecieran su apoyo a los gobiernos africanos.

17. Los traficantes internacionales de drogas explotaban cada vez más la ubicación geográfica de los países de América Central y el Caribe, así como su limitada capacidad de interceptación, para el transbordo de cocaína y (en el caso del Caribe) cannabis destinadas a América del Norte y Europa. La utilización de esa región para el tráfico en tránsito había propiciado el creciente uso indebido de cocaína, incluida la cocaína en forma de "crack" en toda América Central. Los preparados farmacéuticos con sustancias

sicotrópicas podían obtenerse fácilmente debido a la laxitud de las medidas de fiscalización de la distribución de esas sustancias, lo cual había redundado en un creciente uso indebido de hipnóticos, sedantes y ansiolíticos, especialmente de benzodiazepinas. La JIFE acogió con agrado la iniciativa de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá para crear una comisión permanente encargada de erradicar la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su uso indebido en Centroamérica.

18. Al referirse a América del Norte, la JIFE señaló la eliminación gradual de los obstáculos al comercio entre el Canadá, los Estados Unidos de América y México con arreglo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que había entrado en vigor el año anterior. La JIFE expresó su confianza de que al reforzarse la cooperación en materia de fiscalización de envíos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los tres países podrían evitar los efectos secundarios negativos que el acuerdo de libre comercio podría tener en el tráfico de estupefacientes. La JIFE valoró las amplias estrategias de fiscalización de drogas de los tres países y destacó sus componentes más importantes, a saber, los programas de reducción de la demanda. En particular, la JIFE ofreció datos sobre los principales y reiterados delitos atribuibles a las drogas y los problemas relativos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en los Estados Unidos de América. Habían aumentado las incautaciones de heroína de mayor grado de pureza y, según el informe, se habían comprobado la oferta y el uso indebido de "crack" en todo el territorio estadounidense. La fabricación y el tráfico ilícitos de metanfetamina, así como su uso indebido seguían planteando problemas considerables. El consumo de "crack" también se estaba extendiendo en las regiones al Este y el centro del Canadá. La erradicación de la cannabis había aumentado en México, país proveedor de gran parte del mercado ilícito de los Estados Unidos.

19. La JIFE valoró la firma de un memorando de entendimiento entre el PNUFID y cuatro países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Chile y el Perú) con el fin de mejorar la cooperación subregional en materia de fiscalización de drogas. La JIFE señaló a la atención de los gobiernos de los países de América del Sur la necesidad de aprobar una legislación eficaz sobre la prevención del blanqueo de dinero. El Perú siguió siendo el mayor productor de hojas de coca en el mundo, a pesar de haber disminuido su producción en 1993. El Perú y Bolivia siguieron siendo los principales productores de pasta de coca, transformada en clorhidrato de cocaína principalmente en Colombia y, en cierta medida, también en los países de origen. Las sustancias químicas necesarias para dicho proceso seguían obteniéndose fácilmente en esos países y se encomió la labor del Gobierno de Colombia, que había incautado grandes cantidades de productos químicos y disolventes enumerados en los Cuadros I y II de la Convención de 1988. Además del persistente problema del uso indebido de pasta de coca mezclada con cannabis o tabaco, en varios países de la región se informó del uso indebido de "crack". En diversos países se comprobó el aumento del uso indebido de sustancias sicotrópicas, en parte, debido a la falta de medidas de fiscalización de los preparados farmacéuticos que contienen dichas sustancias. En algunos países se informó del cultivo ilícito de adormidera y la JIFE subrayó la importancia de que los gobiernos consideraran, como cuestión de alta prioridad, la prevención de dicho cultivo, así como la producción de opio y la fabricación de morfina y heroína.

20. En el Asia sudoriental, donde varios países estaban reforzando su estructura legislativa, la JIFE tomó nota con satisfacción de la creciente cooperación entre China, Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Tailandia en materia de desarrollo alternativo, reducción de la demanda ilícita de estupefacientes y represión. El blanqueo de dinero seguía planteando un grave problema y la JIFE invitó a los gobiernos a que siguieran las recomendaciones del Grupo Especial de Expertos Financieros. El cultivo ilícito de adormidera continuó, principalmente a lo largo de las fronteras de Myanmar. Tras los éxitos logrados en Tailandia con la reducción del cultivo ilícito de adormidera y de la producción ilícita de opio, se había reducido también considerablemente la producción de opio en algunos distritos de la República Democrática Popular Lao. Se habían utilizado diversas rutas para los envíos de las drogas, por ejemplo, a través del territorio de Viet Nam y, por tierra, a través de China, pero Tailandia había seguido siendo un gran mercado para la heroína procedente del Triángulo de Oro.

21. La heroína seguía siendo la principal droga objeto de uso indebido en particular en Tailandia, Singapur y Hong Kong, pero también se hacía uso indebido del opio, principalmente en las zonas rurales de Asia sudoriental. La fabricación, el tráfico ilícitos y el uso indebido de metanfetaminas en gran escala figuraban también entre los graves problemas de la región en materia de estupefacientes. En algunos países de la región se había detectado el uso indebido de cocaína.

22. En varios países del Asia meridional se había registrado un creciente tráfico y uso indebido de cannabis, y había continuado el contrabando de resina de cannabis desde Nepal y regiones del Asia sudoccidental. En la India había aumentado la fabricación clandestina de heroína. Se había denunciado un mayor uso indebido de heroína en toda la región, en particular, en zonas urbanas de la India, Maldivas y Nepal. En Bangladesh, la India, Maldivas y Nepal, se observó el uso indebido de jarabes para la tos que contenían codeína. La JIFE observó con preocupación el creciente uso indebido en Bangladesh, la India y Nepal de buprenorfina fabricada lícitamente en la India. Otro de los grandes problemas de la región era la fabricación ilícita de metacualona y la introducción de esta sustancia, de contrabando, en África.

23. Al examinar la situación del Asia sudoccidental, la JIFE señaló a la atención el aumento de la delincuencia relacionada con las drogas que se había sumado a las grandes dificultades socioeconómicas por las que atravesaban los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en el Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán, y Georgia) y Asia central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). Era necesario aumentar con urgencia la asistencia internacional a esos países. La difusión del uso indebido de opiáceos y efedrona por vía parenteral era motivo de gran preocupación de las autoridades de los países miembros de la CEI en Asia central, donde se estimaba que casi el 1% de la población consumía ocasional o habitualmente sustancias indebidas. La ruta que iba del Afganistán y el Pakistán a Turquía, a través de la República Islámica del Irán, seguía siendo la principal ruta utilizada para el envío de resina de cannabis y de heroína con destino a Europa.

24. La República Islámica del Irán y el Pakistán habían firmado un memorando de entendimiento, con el apoyo del PNUFID, que abarcaba los aspectos más

importantes de la fiscalización de estupefacientes. La JIFE esperaba que la creciente cooperación económica en la región redundaría en una cooperación más estrecha, en el plano operacional, en la lucha contra el tráfico de drogas. La JIFE exhortó también a fortalecer las iniciativas destinadas a reducir la demanda. En el Afganistán y el Pakistán se había seguido cultivando cannabis en gran escala y el uso indebido de cannabis y de su resina seguían siendo un problema considerable en toda la región. La fabricación ilícita de heroína también había continuado, por ejemplo, al norte del Afganistán y desde el Pakistán y el Afganistán se habían sacado de contrabando grandes cantidades de opio y morfina hacia otros países de la región para su posterior procesamiento.

25. En Europa occidental, el Tratado de Maastricht, que había entrado en vigor en noviembre de 1993, había sentado las bases para adoptar un enfoque integrado a la fiscalización de estupefacientes en Europa y disposiciones concretas en esa materia. La JIFE acogió con agrado el plan de acción de la Unión Europea para la lucha contra las drogas correspondiente al período 1995-1999, donde se prestaba particular atención a la reducción de la demanda. La JIFE advirtió contra las consecuencias de tolerar la venta y el uso indebido de estupefacientes. La JIFE reconoció la importancia de las políticas de reducción del daño, pero hizo hincapié en que no deberían considerarse sustitutos de una política de reducción de la demanda.

26. En los Estados europeos miembros de la CEI (Belarús, la Federación de Rusia, la República de Moldova y Ucrania) la cannabis y la paja de adormidera eran las drogas de mayor producción local, pero la fabricación ilícita de drogas sintéticas (opiáceos y sustancias sicotrópicas) aumentaba rápidamente. Al mismo tiempo, había aumentado considerablemente el tráfico en tránsito. La JIFE invitó a la comunidad internacional a que apoyara los esfuerzos del PNUFID para ayudar a esos países.

27. Grandes cantidades de cannabis y de resina de cannabis salían de contrabando de África y del Asia occidental con destino a Europa, donde seguía siendo objeto del mayor uso indebido. En 1993 se habían incautado en Europa los mayores cargamentos de heroína y cocaína. Si bien algunos países habían informado de variaciones en las preferencias al registrarse un mayor consumo de cocaína que de heroína, el uso indebido de ésta seguía en aumento en algunos de los países de Europa central y oriental. El uso indebido de "crack" se difundía en diversos países y se sospechaba que existía una enorme cantidad de laboratorios sencillos para refinar la cocaína. La fabricación ilícita de metanfetaminas había seguido siendo un grave problema y los crecientes mercados ilícitos se abastecían de proveedores de los Países Bajos (80% de las incautaciones) y también de Polonia. En Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa y Ucrania se habían desmantelado laboratorios clandestinos de metanfetaminas. La JIFE también señaló a la atención la necesidad de establecer políticas orientadas a reducir la demanda injustificada de hipnóticos, sedantes y ansiolíticos con fines médicos.

28. Los países de Oceanía se utilizaban cada vez más como puntos de tránsito y corrían el riesgo de convertirse en centros de blanqueo de utilidades procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes. Australia estaba prestando

asistencia en la revisión y armonización de la legislación sobre drogas en la región. En Papua Nueva Guinea, entre otros países, se estaba realizando una campaña para reducir la demanda, con la asistencia del PNUFID y de Australia. La JIFE expresó su preocupación por la propagación de variedades de cannabis con un contenido muy alto de THC en Papua Nueva Guinea.
